



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)**

Demandante: JUAN CARLOS RESTREPO RAMÍREZ  
Demandados: COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.  
Litisconsorte: PORVENIR S.A.  
Radicado: 05001 31 05 019 2023 00147 01  
Sentencia: S-052

### **AUTO**

En atención a la escritura pública 3377 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., se le reconoce personería como apoderado judicial al Dr. RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES, T.P. 103.505 del C. S. de la Judicatura. Y se accede a la sustitución de poder presentada por la referida apoderada, a favor de la Dra. KEILA CRISTINA DURANGO VIANA portadora de la T.P. N° 258.819 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que el apoderado principal.

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a

resolver los **recursos de apelación** interpuestos por **PORVENIR S.A** y **COLFONDOS S.A**; y en el grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 24 de noviembre de 2023.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

JUAN CARLOS RESTREPO RAMÍREZ pretende que se **DECLARE** la nulidad o ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad – RAIS.

Como consecuencia, solicita se **CONDENE** a PROTECCIÓN S.A. y a COLFONDOS S.A. a trasladar todos y cada uno de los aportes existentes en la cuenta de ahorro individual, con sus respectivos rendimientos e intereses; que, por ende, se declare válidamente afiliado y sin solución de continuidad en el Régimen de Prima Media - RPM administrado por COLPENSIONES, conservando el derecho a pensionarse con las previsiones de la Ley 797 de 2003. Y, que se condene a las demandadas al pago de costas.

### **LOS HECHOS**

Expone, como fundamento de sus peticiones, que nació el 30 de octubre de 1961, que fue afiliado al RPM en diciembre de 1988 y se trasladó del RPM al RAIS administrado por COLFONDOS S.A. en febrero de 1997, y posteriormente se trasladó a PROTECCIÓN S.A. en julio del 2000. Indica que no fue debidamente asesorado al momento de realizar los traslados tanto a COLFONDOS S.A. como a PROTECCIÓN S.A., debido

a que no le informaron las ventajas, desventajas, implicaciones y consecuencias de trasladarse de régimen pensional; que no le informaron que al trasladarse de régimen perdería los beneficios del RPM, como tampoco se le realizó proyección pensional; que los asesores de los fondos privados al momento de la afiliación no se detuvieron a analizar su situación personal. Sostiene que el día 3 de febrero de 2023 solicitó a PROTECCIÓN S.A., la proyección de mesadas pensionales en ambos regímenes y la solicitud de traslado, la cual fue resuelta el día 27 de febrero de 2023 reflejando su mesada pensional en ambos regímenes y que la afiliación al fondo se presumía válida, por lo que solo accedería al traslado si la autoridad judicial así lo decidiera. Que el día 17 de febrero de 2023 solicitó a COLPENSIONES que activara su afiliación al RPM, pero se le contestó que no era posible por encontrarse a menos de 10 años para cumplir con la edad de pensión. Que el día 17 de marzo de 2023 a través de derecho de petición, solicitó a COLFONDOS S.A. la anulación de su afiliación, la cual fue negada.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES admite la fecha de nacimiento alegada, la afiliación al RPM, el traslado del actor a COLFONDOS S.A. y la solicitud por éste presentada con su respectiva respuesta. A los demás hechos indica que no le constan por ser ajenos a la entidad. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones la de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, buena fe, imposibilidad de que COLPENSIONES decrete la ineficacia del traslado, improcedencia de la declaratoria de invalidez del traslado, presunción de legalidad de los actos jurídicos, falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad condena en costas, equilibrio del sistema financiero, prescripción y compensación.

PROTECCIÓN S.A. en su réplica, acepta los hechos que refieren a la fecha de nacimiento del actor, la fecha de afiliación a PROTECCIÓN S.A. y la solicitud presentada ante el fondo; no es cierto, dice, que al

momento del traslado no se le hubiera brindado una debida asesoría, pues al demandante se le entregó una información clara y precisa; frente a los demás hechos, indica que no le constan por ser ajenos al fondo. Se opuso a todas las pretensiones en razón a que el acto de traslado del demandante es válido, exento de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo. Planteó como excepciones inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua a favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional, cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe y aplicación del precedente sobre los actos de relacionamiento al caso concreto.

COLFONDOS S.A. indica que es cierta la fecha de nacimiento del actor, también lo es la fecha del traslado a este fondo, e igualmente que el actor elevó solicitud sobre su traslado a la cual se le dio respuesta; niega que el traslado de régimen se haya efectuado hacia COLFONDOS S.A. aclarando que este se hizo frente a PORVENIR S.A., tampoco es cierta la afirmación respecto de que no se le brindara una debida asesoría; frente a los demás hechos, menciona que no son tales sino apreciaciones de la parte demandante. Se opone a las pretensiones. Y presenta como excepciones la de prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado, compensación y pago, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al RAIS, ratificación de la afiliación al RAIS, y ratificación de la afiliación al actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por COLFONDOS S.A.

Por último, PORVENIR S.A., vinculado como litisconsorte necesario, al contestar expresa que no es cierto que el traslado de régimen pensional se haya hecho por medio de COLFONDOS S.A., aclarando que fue por medio de esta AFP en el mes de mayo de 1994; frente a los demás

hechos, explica que no le constan por ser hechos ajenos a este fondo, o que no son susceptibles de ser probados mediante confesión. Se opuso a las pretensiones debido a que la afiliación del demandante fue completa, veraz y oportuna. Plantea como excepciones validez y eficacia de la afiliación e inexistencia de vicios en el consentimiento, saneamiento de la eventual nulidad relativa, aplicación del artículo 1746 del Código Civil en relación con los rendimientos financieros, gastos de comisión y primas de seguro, pago, compensación, prescripción y buena fe.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2023, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** ineficaz el traslado del actor al Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, materializado inicialmente a través de PORVENIR S.A., declarando que estuvo afiliado sin solución de continuidad al RPM; **ORDENÓ** a PORVENIR S.A., a PROTECCIÓN S.A. y a COLFONDOS S.A. a trasladar los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, los gastos de administración que se componen de los seguros previsionales, primas de seguros y pagos destinados al fondo de garantía de pensión mínima, los cuales deben estar debidamente indexados, por el lapso en que el demandante ha permanecido en cada fondo. E indicó que, al momento de cumplirse la orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores y el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique; **ORDENÓ** a COLPENSIONES a reactivar la afiliación del demandante y a recibir la devolución de los dineros ordenados; y **CONDENÓ** en costas a la AFP PORVENIR S.A.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de PORVENIR S.A. solicita se revoque la sentencia de primera instancia, ya que no se

puede declarar la ineficacia del traslado, en razón a que se encuentra debidamente probado el cumplimiento de los deberes legales de información que recaían en cabeza de esta parte, como lo demuestra el formulario de afiliación, el cual no fue refutado, tachado o desconocido por el demandante. Indica que para la época el deber de información era básico y necesario. Señala que se deben revocar los conceptos a devolver y la indexación, ya que los gastos de administración surgen por autorización legal y los seguros previsionales surgen por mandato legal y corresponden a esas sumas que de manera mensual son giradas con destino a las aseguradoras previsionales del RAIS para que frente a una eventual contingencia por invalidez y sobrevivencia, y frente los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, sostiene que estos no se encuentran en el patrimonio del fondo privado de pensiones sino en un fondo administrado por la Nación, por lo que las orden debe dirigirse a tal entidad. Y que no se le debe condenar en costas, ya que la decisión desconoce los preceptos legales de la migración de regímenes pensionales, ignorando que el fondo ha actuado con apego a los preceptos legales y en consonancia con el principio de buena fe constitucional.

COLFONDOS S.A., a su turno, recurre solicitando la revocatoria de la sentencia ya que las administradoras del RAIS, para la fecha de afiliación, solo tenían el deber de proporcionar un formulario conforme al artículo 11 del Decreto 692 de 1994, y solo hasta el año 2014 con la Ley 1748 del mismo año y el Decreto del Consumidor Financiero 2071 de 2015, se configuró la obligación del deber de información directa, por lo que se entiende que se suministró la información debida por esta parte de acuerdo al momento de la afiliación. Señala que, respecto de la orden de devolver las cuotas de administración y seguros previsionales, solicita que frente a los primeros se tenga en cuenta que ellos son dados por descuentos originados por mandato legal del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, y que igualmente corresponden al ejercicio acucioso frente los aportes que se depositan mensualmente en la cuenta de los afiliados; es por ello que es injusto que se ordene

la devolución de estos dineros, ya que en el momento de la afiliación se ejerció la labor de forma correcta. Expresa que se debe dar la figura de las restituciones mutuas, debido a que considera que la misma debe atender a que las consecuencias del contrato se devuelvan a su estado anterior de la celebración, y que en el caso en particular, esto no se realiza en debida forma, porque al ordenar la devolución de los rendimientos financieros, lo destinado al fondo de garantía de pensión mínima y la totalidad de los descuentos de los gastos de administración, al haber cotizado el demandante siempre al RPM, los rendimientos financieros no existirían. Señala que no debe proceder la indexación, al tener en cuenta que los rendimientos son superiores a los que se pueden generar en el RPM si el actor no se hubiese trasladado de régimen. Y que no se le debe condenar en costas.

Se conoce igualmente del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término legalmente concedido, COLPENSIONES manifiesta que no existe vicio en el consentimiento alguno al demandante, ya que se trata de un traslado de régimen pensional realizado voluntariamente por el actor.

COLFONDOS S.A. allegó escrito de alegaciones al despacho, sosteniendo que en el presente caso no se probó los eventos previstos en el artículo 1741 del Código Civil para declarar la nulidad absoluta o relativa del acto jurídico de traslado, por lo cual este goza de plena validez; que el demandante podía ejercer el derecho de retracto y como también el de libre escogencia; que esta entidad si acreditó el deber de información y que no se le debe imponer otra carga adicional; que no comparte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en la ficción legal que elabora; que se deben dar las restituciones mutuas, por lo que no se deben devolver los rendimientos ni las cuotas de

administración como tampoco los seguros previsionales y mucho menos la indexación de las condenas.

PORVENIR S.A. en sus alegatos de conclusión indica que debe revocar la sentencia, toda vez que este fondo cumplió el deber de información, y fue voluntad del actor seguir afiliado al RAIS. Y que no se deben devolver los conceptos ordenados por el juez, y en caso de confirmarse la sentencia se debe aplicar las restituciones mutuas para no devolverse los rendimientos financieros, como tampoco los demás conceptos.

### **CONSIDERACIONES:**

Se procede a desatar los recursos de apelación interpuestos por PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** el Sr. JUAN CARLOS RESTREPO RAMÍREZ nació el 30 de octubre de 1961<sup>1</sup>; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones desde el 23 de junio de 1989<sup>2</sup>; **iii)** el 10 de mayo de 1994<sup>3</sup> suscribió formulario de afiliación ante PORVENIR S.A.; **iv)** el 29 de enero de 1997<sup>4</sup> se trasladó a COLFONDOS S.A.; y **v)** el 10 de abril del 2000 suscribió formulario de afiliación con PROTECCIÓN S.A.<sup>5</sup> entidad en la que se encuentra vinculado actualmente.

---

<sup>1</sup> Folio 18 de la demanda.

<sup>2</sup> Folio 316 de la contestación de Colpensiones.

<sup>3</sup> Folio 58 de la contestación de PORVENIR S.A.

<sup>4</sup> Folio 28 de la contestación de COLFONDOS S.A.

<sup>5</sup> Folio 30 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.



Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>6</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

---

<sup>6</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

*"Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

*"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien*

*sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente que no recuerda las circunstancias de traslado de régimen, ni el traslado a cada uno de los fondos de pensiones en el RAIS, pero menciona que los mismos fueron realizados para favorecer o facilitar las situaciones a su empleador, al tener que diligenciar solo un formulario, los cuales, a su consideración, son extenuantes de tramitar.

De lo anterior no se deriva -entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

### **Conceptos a trasladar**

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en los recursos de apelación por PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado "... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen..."

Dijo además en esa providencia, que:

*"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)*

*De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."*

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos

descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el señor JUAN CARLOS RESTREPO RAMÍREZ estuvo vinculado a cada entidad.

Se advierte que la orden a PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, aportes al fondo de garantía de pensión mínima y las sumas de los seguros previsionales, solo estos conceptos deben incluir la respectiva ***indexación***, según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y conforme fue solicitado por COLPENSIONES con la contestación a la demanda, lo que además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que “... *todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.*”

### **Costas procesales**

Finalmente, otro tema que cuestiona las apoderadas de PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. a través de sus recursos de apelación, tiene que ver con la condena en costas impuesta a su cargo. Para resolver la inconformidad que plantea las recurrentes, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores

en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso PORVENIR presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas el cumplimiento del deber de información y la validez del acto jurídico de traslado, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales.

No obstante, en lo que se refiere a COLFONDOS, debe señalarse que el primer traslado del demandante a un fondo privado se realizó a PORENIR S.A., y que la afiliación a COLFONDOS fue producto de un movimiento dentro del mismo régimen, de manera que no fue propiamente su incumplimiento al deber de información el que dio lugar al presente proceso ni a la declaratoria de ineficacia de traslado, por lo que no sería procedente la condena en costas en contra de ésta entidad, tal y como lo señaló el juez.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA.**

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y COLFONDOS por haber sido vencidas en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'300.000 dividido en partes iguales para cada una.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 24 de noviembre de 2023.



Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 29886da5004b68d6d7bd2c7e07444e3833c5d3d287b86b4bb1c1ba698aaaa8cd  
Documento generado en 12/03/2024 11:51:22 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>